

La fiscalidad y el cupo catalán marcan la comisión de financiación autonómica

El grupo de estudio creado en la Asamblea inicia las comparecencias de expertos sobre la reforma del modelo actual

JUAN SORIANO

MÉRIDA. Las políticas fiscales y el concierto singular catalán marcarán el desarrollo de la comisión de estudio sobre financiación autonómica creada en la Asamblea de Extremadura. Este grupo de trabajo empezó ayer la parte central de su labor con el inicio de las comparecencias de expertos en la materia.

La previsión es que esta fase, con cerca de 40 expertos, concluya en el primer trimestre del próximo año, tras lo que se dará paso a un periodo de unos dos meses para la elaboración y el debate de las conclusiones.

A principios de año todos los grupos parlamentarios apoyaron un documento, propuesto por el Gobierno regional, en el que se reclamaba una dotación justa para Extremadura. Y en mayo se creó la comisión a iniciativa del PSOE, con el respaldo de todos los partidos, para debatir sobre la reforma del modelo de financiación, que debería haberse revisado en 2014.

El marco de actuación estaba por tanto definido. Pero en julio se anunció el acuerdo entre PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ese pacto contempla la creación de un sistema singular, similar al concierto vasco y navarro, para Cataluña. La implicación que tiene



Comparecencia de Carlos Sánchez Mato en la comisión de estudio sobre financiación autonómica. HOY

esta medida, que por otro lado es la primera propuesta de reforma del sistema actual, marcará el desarrollo de la comisión en la Asamblea de Extremadura.

Así fue ayer en la primera comparecencia, del abogado Javier Bardají, asesor financiero y ex-presidente del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura. Según expuso, «regiones como la nuestra se verían tremendamente perjudicadas» con

La Junta pide consensuar una postura en común y reclama una hacienda estatal fuerte y un sistema basado en la solidaridad

el concierto catalán, que, unido al vasco y navarro, supondría sacar del sistema al 30% del PIB de las comunidades autónomas.

A juicio de Bardají, el concierto catalán sería «una catástrofe para Extremadura», ya que Cataluña es la comunidad que más aporta al sistema de financiación actual junto con Madrid. Además, no concibe que «un gobierno va a renunciar a recaudar los impuestos en una parte importante del territorio».

Bardají compareció a petición del PP, cuyos diputados incidieron en sus intervenciones en la amenaza que supone el concierto catalán. Una línea similar a la mantenida por Vox, que también puso en duda la buena marcha del sistema de financiación.

Sin embargo, los parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura tomaron una línea distinta, más centrada en la reforma del modelo en vigor y en la necesidad de sumar cambios en la política fiscal.

El economista Carlos Sánchez Mato, quien compareció a propuesta de Unidas por Extremadura, expuso que el verdadero problema de las comunidades no es el reparto de los fondos, sino que hacen falta más fondos. Para ello, aboga por una reforma fiscal que permita ingresar más dinero para sostener los servicios públicos. Según expuso, la presión fiscal en España está cinco puntos por debajo de la media de la Unión Europea. «Hace falta más tarta para repartir», dijo.

Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional que compareció a propuesta del PSOE y de Unidas por Extremadura, repasó las características del modelo actual y explicó los que a su juicio deben ser los principales cambios. En su opinión, es necesario que el Fondo de Garantía, el más cuantioso y el que está destinado a sostener los servicios fundamentales, conceda en su reparto más importancia a variables como la superficie y menos a la población. También abogó por aumentar la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial e introducir criterios como la generación de energía y la tendencia demográfica, así como por una armonización fiscal para evitar competencias entre regiones.

En la comisión también participa el Gobierno regional, con voz pero sin voto. La directora general de Financiación Autonómica de la Junta, Rosa Ramos, recaló la importancia de consensuar una postura en común y abogó por «una hacienda estatal fuerte con recursos suficientes», así como un sistema basado en la solidaridad y la negociación con todas las comunidades autónomas.

Un acuerdo difícil

Aunque tan sólo se ha celebrado una jornada de comparecencias, por lo visto ayer las posiciones de los grupos están distanciadas y muy condicionadas por la situación política nacional. Esto complica un posible acuerdo en la redacción de las conclusiones.

Esto quedó de manifiesto con las valoraciones de los dos grandes partidos. El portavoz del PP en la comisión, Hipólito Pacheco, aseguró que su formación es la única que defiende «los intereses de Extremadura por encima de todo». Por su parte, el portavoz de Hacienda del PSOE, Jorge Amado afirmó que la presidenta de la Junta, María Guardiola «utiliza y manosea la financiación autonómica con fines claramente electoralistas».